



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



Instituto Internacional para
la Educación Superior
en América Latina y el Caribe

ess

Educación Superior y Sociedad

Vol. 32 - Nro. 2

(julio - diciembre de 2020)

32

**Contribución de la educación
superior en América Latina
y el Caribe a los ODS:
experiencias y prácticas desde
sus funciones académicas**

Instituto Internacional de la Unesco
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 2020
Educación Superior y Sociedad (ESS)
Nueva etapa
Vol. 32 - Nro. 2
ISSN 07981228 (Formato impreso)
ISSN 26107759 (Formato digital)
Publicación semestral

CONSEJO EDITORIAL GENERAL

DIRECTOR UNESCO-IESALC

Francesc Pedró

EDITOR GENERAL

Norberto Fernández Lamarra

EDITORA EJECUTIVA

Débora Ramos Torres

EDITORES ASOCIADOS

Cristian Pérez Centeno

Marisa Álvarez

Pablo García

PRODUCCIÓN EDITORIAL

José Antonio Quintero

Sara Maneiro

CORRECCIÓN DE ESTILO

Raizabel Méndez

DIAGRAMACIÓN

Raúl Azuaje

TRADUCCIÓN

Yara Bastidas

Apartado Postal N° 68.394

Caracas 1062-A, Venezuela

Teléf. : 58 212 2861020

E-mail: ess-iesalc@unesco.org

d.ramos-torres@unesco.org

ESS evalúa los trabajos mediante el sistema de arbitraje «ciego por pares» a través de especialistas externos a la redacción; por lo que todos los trabajos aquí publicados han sido arbitrados.

Educación Superior y Sociedad (ESS) es una publicación registrada en las siguientes bases de datos e índices:

COMISIÓN DE ARBITRAJE

Alta Hooker

(Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Nicaragua)

Ana Julia Bozo (Universidad de Cartagena, Colombia)

Anny Ocoró Loango

(Asociación de Investigadores Afrolatinoamericanos y del Caribe, Argentina)

Carolina Pinedo Henríquez (Universidad Andrés Bello, Chile)

Cristian Pérez Centeno (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Daniel Vaz Freire (Universidade de São Caetano do Sul, Brasil)

Enoé Texier (Universidad Central de Venezuela, Venezuela)

Enrique Martínez Larrechea

(Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana, Uruguay)

Francesc Pedró (UNESCO-IESALC)

Francisco Javier Gil (Universidad de Santiago de Chile,

Cátedra UNESCO en Inclusión en Educación Superior Universitaria, Chile)

Geovany Rodríguez Solís (Universidad Autónoma de Yucatán, México)

Helena Hernández Aguirre (UniCAFAM, Colombia)

Jairo Arias Gaviria (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)

Jocelyne Gacel-Ávila (Universidad de Guadalajara, México)

José Antonio Quinteiro (UNESCO-IESALC)

Luciano Rodrigues Marcelino (Universidad Técnica Particular de Loja, Brasil)

Marisa Álvarez (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Mónica Marquina (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Orlando Sáenz (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia)

Pablo Daniel García (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Raizabel Méndez (Universidad de los Andes, Venezuela)

Rosa María González Jiménez (Universidad Pedagógica Nacional, México)

Rossana de Souza e Silva (Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, Brasil)

Sara Maneiro (UNESCO-IESALC)

Sergio Enrique Hernández Loeza

(Universidad Campesina Indígena en Red, México)

Verena Hitner Barros (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Brasil)

LATINDEX: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal
<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26998>

IRESIE: Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa
<http://www.unam.mx/cesu/iresie>

REVENCYT: Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología
<http://www.revenct.ula.ve>

..... DIRECTOR UNESCO-IESALC

Francesc Pedró

..... EDITOR GENERAL

Norberto Fernández Lamarra

..... CONSEJO CONSULTIVO EDITORIAL

Alta Hooker

Ana Capilla Casco

David Julien

Jorge Enrique Delgado

José Joaquín Brunner

María José Lemaitre

Rossana Valéria de Souza e Silva

..... EDITORA INVITADA

Rossana Valéria de Souza e Silva

Las opiniones expresadas en los artículos aquí publicados son las de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de UNESCO-IESALC.

Contenido

Contribución de la educación superior en América Latina y el Caribe a los objetivos de desarrollo sostenible: experiencias y prácticas desde sus funciones académicas

Presentación Rossana Valéria de Souza e Silva	10
TEMA 1. Contribuciones desde la función docente	
1. Una mirada al estado de la Educación Superior con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Everly Castellar	14
2. Formação Interdisciplinar numa em Universidade Pública no Sul da Bahia (Brasil): Desenho Institucional, Prototipagem Curricular e Inovações Pedagógicas Naomar de Almeida-Filho y Denise Coutinho	36
3. Proceso de autoevaluación en Educación Superior: Una propuesta de transformación universitaria desde la mirada ecoformativa Luis Arrieta Ávila y Yalile Chan Jiménez	65
4. Permanencia de la población estudiantil en la universidad a partir de un estudio longitudinal de cohortes en cuatro carreras María J. Solórzano Salas, María G. Regueyra Edelman, Catalina Esquivel Rodríguez y Freddy Arias Mora	100
5. Educar en la Diversidad: Desafíos de la Educación Superior para la Enseñanza de la Lengua Garífuna en Honduras Jessica Fernández, Randolpho García, Cesar Sabio y Georgina Ruiz	134
TEMA 2. Contribuciones desde la función investigativa	
1. ODS y Educación Superior. Una mirada desde la función de investigación Camila Calles Minero	167
2. Perspectivas, supuestos y reflexiones en el campo de la investigación desde la experiencia de formación universitaria en Desarrollo Humano Carlos Meléndez Pereira, Mauricio Phélan C. y Milagros García Cardona.	202

Contenido

TEMA 3. Contribuciones desde la función de extensión o de interacción con la sociedad

1. Línea de base de la responsabilidad social en una universidad pública: Eje de campus responsable 228
José M. Yampufé Cornejo, Sonia Antezana Alzamora y Giuseppe Sarmiento Peralta.

2. Implementación de “Campus Sostenible”: prácticas ambientales positivas en una universidad de Colombia 251
Luis F. Amar Cabrera y Hernando Uribe Castro.

TEMA 4. Contribuciones integrales y sistémicas

1. La Educación Superior en América Latina y el Caribe: el reto de la desigualdad frente a los ODS 279
Axel Didriksson T.

2. Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Continuidad y avances del proceso iniciado en el Seminario de Bogotá 305
Orlando Sáenz

3. Grilla y Ventana: Dos herramientas posibles para el análisis de la contribución de Educación Superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 326
Tito Flores Cáceres

4. Pensando global y actuando local: Implementación de los ODS en las instituciones de educación superior y sus asociaciones. Una experiencia de colaboración 353
Sandra Guarín Tarquino, Guillermo Parra e Isabel Toman.

5. Ecologización institucional, estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una institución de educación superior en Colombia 375
Carlos A. Amaya Corredor, Carolina Hernández Contreras y Nancy Tavera Castillo.

6. Caracterización de la contribución a los ODS en una universidad de Chile: ampliando la mirada desde la gestión institucional a la investigación 403
Ignacio Oliva, Bruna Garretón, Francisco Urquiza y Juan Carlos Muñoz.

7. Contribuições da universidade para o acesso à justiça via direitos na área da saúde e para o desenvolvimento sustentável. 427
Cibele Souza y Adriana Goulart de Sena Orsini

4

Tema 4 Contribuciones integrales y sistémicas

1. La Educación Superior en América Latina y el Caribe: el reto de la desigualdad frente a los ODS
Axel Didriksson T.
2. Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Continuidad y avances del proceso iniciado en el Seminario de Bogotá
Orlando Sáenz
3. Grilla y Ventana: Dos herramientas posibles para el análisis de la contribución de Educación Superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Tito Flores Cáceres
4. Pensando global y actuando local: Implementación de los ODS en las instituciones de educación superior y sus asociaciones.
Sandra Guarín Tarquino, Guillermo Parra e Isabel Toman
5. Ecologización institucional, estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una institución de educación superior en Colombia.
Carlos A. Amaya Corredor, Carolina Hernández Contreras y Nancy Tavera Castillo
6. Caracterización de la contribución a los ODS en una universidad de Chile: ampliando la mirada desde la gestión institucional a la investigación.
Ignacio Oliva, Bruna Garretón, Francisco Urquiza y Juan Carlos Muñoz
7. Contribuições da universidade para o acesso à justiça via direitos na área da saúde e para o desenvolvimento sustentável.
Cibele Souza y Adriana Goulart de Sena Orsini

7. University contributions for sustainable development and the access to justice via health rights

Cibele Souza

Adriana Goulart de Sena Orsini

ABSTRACT

This article aims to analyze the performance of Higher Education Institutions (HEI) in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), by analyzing the experience of the Federal University of Minas Gerais (UFMG) in Brazil with the development of extension and research actions for the effective access to justice on relations in health area. University actions focused on the investigation of dialogical methodologies, especially mediation, as a means to promote access to justice in the health area and effectuation of the right to health. These actions involved theoretical research, including doctrinal, legislative and comparative research, and field research, through participation in hospital multiprofessional meetings and interviews with health institution professionals. Through the university actions carried out, it was found the possibility of effective access to justice by means of rights in health. Through the inclusion of mediation procedures and practices in health services, it was identified that mediation is a capable way to strengthen and expand participation and the effectuation of rights, contributing to the concreteness of SDG 16. These practices and the results achieved evinced the crucial role of the HEI and the university in achieving the SDGs.

Keywords: Access to justice; search; extension; right to health.

7. Contribuciones de la universidad al acceso a la justicia a través de los derechos en materia de salud, y al desarrollo sostenible

Cibele Souza

Adriana Goulart de Sena Orsini

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la Institución de Educación Superior (IES) en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante el análisis de la experiencia vivida en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Brasil, por medio de la puesta en marcha de acciones de extensión e de investigación que permiten un acceso efectivo a la justicia en materia de salud. Las acciones universitarias se enfocaron en la investigación de metodologías dialógicas, especialmente la mediación, como medio para promover el acceso a la justicia en el área de la salud y la concreción del derecho a la salud. Estas acciones involucraron investigación teórica, incluyendo investigación doctrinal, legislativa y comparada, e investigación de campo, a través de la participación en encuentros hospitalarios multiprofesionales y la realización de entrevistas con profesionales de instituciones de salud. A través de las acciones universitarias realizadas, se encontró la manera de posibilitar el acceso a la justicia a través de los derechos a la salud. Mediante la inclusión de procedimientos y prácticas de mediación en los servicios de salud, se identificó que la mediación es una forma hábil para fortalecer y ampliar la participación y la concreción de derechos, contribuyendo al logro del ODS 16. Estas prácticas y los resultados obtenidos mostraron el papel crucial de la IES y la universidad en el logro de los ODS.

Palabras clave: Acceso a la justicia; Investigación; Extensión; Derecho a la salud.

7. Contributions des universités à l'accès à la justice par le biais des droits en matière de santé, et au développement durable

Cibele Souza

Adriana Goulart de Sena Orsini

RÉSUMÉ

Cet article vise à analyser la performance des établissements d'enseignement supérieur (EES) dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en mettant l'accent sur l'expérience de l'Universidade Federal de Minas Gerais (Université Fédérale de Minas Gerais) (UFMG), au Brésil, à travers le développement d'actions d'extension et de recherche qui permettent l'accès effectif à la justice en matière de santé. Les actions de l'université se sont centrées sur l'investigation des méthodologies dialogiques, en particulier la médiation, comme moyen de promouvoir l'accès à la justice dans le domaine de la santé et la mise en place effective du droit à la santé. Ces actions ont impliqué des recherches théoriques, y compris des recherches doctrinales, législatives et comparatives, ainsi que des recherches sur le terrain, par le biais des rencontres multiprofessionnelles dans des services hospitaliers et la réalisation d'entretiens avec des professionnels des établissements de santé. À travers la réalisation des actions universitaires, la possibilité de rendre possible l'accès à la justice par le biais des droits à la santé a été identifiée. Grâce à l'inclusion de procédures et de pratiques de médiation dans les services de santé, il a été confirmé que la médiation est un moyen habile de renforcer et d'élargir la participation et l'application des droits, contribuant à la réalisation de l'ODD 16. Ces pratiques et les résultats obtenus ont démontré le rôle crucial de l'EES et de l'université dans la concrétisation des ODD.

Mots-clés: Accès à la justice; Recherche; Extension; Droit à la santé.

Contribuições da universidade para o acesso à justiça via direitos na área da saúde e para o desenvolvimento sustentável

1. Introdução

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável assumida pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) é formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030, de modo a promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável.

O ODS 16 refere-se à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas voltadas ao desenvolvimento sustentável, bem como ao acesso à justiça para todos e à construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Nesse aspecto, é necessária a compreensão do que constitui o acesso à justiça, em especial pela via dos direitos, e a identificação das instituições relacionadas a essa nuclear questão, possibilitando, assim, que sejam estabelecidos os meios para o alcance desse acesso, sem negligenciar o desenvolvimento de sociedades voltadas à paz social, a eficácia dos órgãos relacionados ao acesso à justiça, a consolidação das vias existentes para tal e a inclusão efetiva dos cidadãos.

A concepção do acesso à justiça voltada à administração adequada dos conflitos reconhece o papel de órgãos e instituições, além do Poder Judiciário, na efetivação do acesso, bem como de outros processos e procedimentos para sua realização além do processo judicial, o que pode se dar em ambientes judiciários ou não (Watanabe, 1988).

A teoria do acesso à justiça possui concepção proposta por Leonardo Avritzer, Marjorie Marona e Lilian Gomes (2014, p. 29), que levou ao conceito do “acesso à justiça pela via dos direitos”. De acordo com essa concepção, o acesso à justiça engloba duas dimensões. A primeira delas refere-se à garantia de efetividade dos direitos, que envolve três pressupostos: (i) informação

acerca destes; (ii) conhecimento que permita o recurso a uma instância ou entidade capaz de resolver eventuais conflitos; (iii) efetiva reparação de injustiça ou desigualdade ocasionada pela violação de um direito. A segunda dimensão diz respeito à possibilidade de participação dos envolvidos na configuração do próprio direito, o que envolve a criação e o reconhecimento de novas categorias de direito. Trata-se de uma compreensão que envolve os direitos da cidadania, por meio de seus atores sociais, novos sujeitos de direito, bem como a sociedade civil e suas potencialidades.

Adotando-se o conceito de acesso à justiça pela via dos direitos, sob a ótica da efetividade, a justiça será atingida quando indivíduos, grupos e coletivos lesados tiverem a consciência e a oportunidade de conhecer e de se informar acerca de seus direitos satisfatoriamente. Pressupõe, assim, políticas no âmbito da informação, educação e divulgação de conhecimentos jurídicos que visem capacitar os cidadãos e as comunidades para, por si mesmos, perante uma situação de desrespeito, violação, exclusão, ofensa ou privação de direitos, a reconheçam como tal (Avritzer et. al.; 2014, p. 20).

Nessa conjuntura mostra-se possível fortalecer e ampliar o acesso à justiça e a efetivação dos direitos por meio da inclusão de instrumentos não judiciais e de outras esferas complementares voltadas à solução de conflitos (Soler, 2014).

O ODS 16 apresenta reflexos e configuração específica em diversos setores e áreas no país, entre as quais este trabalho destaca sua presença no âmbito da saúde. Como exposto neste artigo, a condução adequada de eventuais conflitos verificados nas relações interpessoais no âmbito dos serviços públicos de saúde e o desenvolvimento do acesso à justiça pela via dos direitos na área da saúde são impulsionadores do ODS 16, contribuindo, de forma reflexa, no ODS 3, referente a assegurar uma vida saudável e sustentável, além de promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Em face dos conflitos surgidos e de suas repercussões no atendimento clínico houve um aumento do número de demandas judiciais contra os profissionais da saúde e contra as instituições hospitalares (Conselho Nacional de Justiça, 2015), situação esta que resulta em maior deterioração das relações entre esses profissionais, pacientes e seus familiares. Nesse sentido, novos meios e formas de solução devem ser pensados para promoção do ODS 16, especialmente pela atuação de instituições próximas à sociedade e de caráter

multidisciplinar, como ocorre com as Instituições de Ensino Superior (IES).

As IES são protagonistas locais e regionais – e às vezes também nacionais e internacionais – nas mais diversas áreas e formas de atuação, em que se inclui a pesquisa, o ensino, a extensão, a construção e a disseminação do conhecimento científico e a formação profissional, estando bem posicionadas para conectar as metas globais às realidades das comunidades locais (Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2020).

Por essa razão, a atuação dessa protagonista pode promover um efeito catalisador gerador de impacto e influência na formulação de políticas públicas visando à criação de um ambiente favorável para a ação no nível local e regional na trajetória para um modelo de desenvolvimento alinhado com os ODS.

Tendo em vista os elementos apresentados, objetiva-se promover a análise crítica sobre experiência vivenciada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mediante o desenvolvimento de ações de pesquisa e de extensão voltadas à efetivação do acesso à justiça pela via dos direitos nas relações estabelecidas do âmbito da saúde. As ações universitárias se voltaram à investigação de metodologias dialógicas, especialmente da mediação, como meio para promover o acesso pela via dos direitos à justiça na área da saúde e a efetivação do direito à saúde sob essa ótica.

Considerando a necessidade de elaboração de formas complementares para solução de conflitos no âmbito da saúde e entendendo o acesso à justiça pela via dos direitos, apresenta-se mobilização promovida por meio de pesquisa e extensão, indicativas da capacidade de contribuição das IES na consecução dos ODS, especificamente o ODS 16 nas questões relativas à saúde pública.

2. Desenvolvimento

A ONU definiu, em 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, oportunidade em que os Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições (Nações Unidas, 2015).

Os ODS servem como plataforma de ação da comunidade internacional e dos governos nacionais na promoção da prosperidade comum e do bem-estar para todos e devem orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos anos.

Para sua efetivação, devem estar envolvidos governos nacionais, regionais e locais, organizações da sociedade civil, setor privado, academia e cidadãos, mobilizados para implementar e acompanhar os ODS.

Nesse âmbito, as Instituições de Ensino Superior (IES) e, especialmente, as universidades têm um papel potencial de contribuição no alcance dos ODS por meio da formação profissional, da pesquisa, da investigação e da extensão. Entendendo seu potencial e alcance, as ações por elas desenvolvidas nas políticas universitárias e nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão colaboram para tornar os ODS realidade nas cidades, regiões e, enfim, nos países e em todo o mundo.

Todos os ODS têm metas diretamente ligadas às responsabilidades dos governos locais e regionais, com especial destaque para aquelas relacionadas à prestação de serviços básicos. No âmbito do ODS 16, desdobram-se as metas 16.3 de promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos; 16.6 de desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; e 16.7 de garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.

A efetivação do acesso à justiça e dessas metas é necessária em todos os âmbitos sociais e institucionais, em que se incluem os serviços de saúde e as relações estabelecidas entre profissionais e usuários do serviço. Esse cumprimento deve se dar transformando esses alvos em algo concreto e eficiente, adaptando-os a seus contextos específicos e ajudando seus cidadãos a entender como ações locais contribuem para a sua realização.

Por esses fundamentos é que se destaca a experiência desenvolvida na UFMG com pesquisa e extensão interdisciplinar para inserção da mediação nos serviços de saúde locais e regionais como metodologia de solução adequada de conflitos e de consequente promoção do efetivo acesso à justiça pela via dos direitos e da garantia do direito à saúde.

3. Ação de Extensão Universitária

O projeto de extensão “Mediação e Saúde na Infância e Juventude” desenvolvido pela UFMG, de 2013 a 2016, contou com a participação de alunos das faculdades de Direito, Psicologia e Medicina, e tinha por objetivo geral colaborar na construção de espaço cada vez mais dialógico frente a situações eventualmente conflituosas no setor de Pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) e da Ouvidoria do HC-UFMG, bem como capacitar, debater, participar e colaborar na promoção da contínua mediação e da participação dialógica frente aos casos clínicos existentes no ambiente hospitalar.

O projeto propôs uma colaboração mútua entre diferentes áreas dos saberes para o aperfeiçoamento das metodologias dialógicas e de mediação sócio-hospitalar, adequando-a ao contexto do Setor de Pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG e da Ouvidoria da instituição. A metodologia, calcada em práticas dialógicas e de mediação, objetivava ser informativa para o empoderamento dos envolvidos e promover a orientação sociojurídica, adequando a linguagem médico-hospitalar ao contexto social e cultural do paciente, como também das demais pessoas envolvidas no caso e no ambiente hospitalar. Para tanto construiu-se o projeto com a previsão de atuação de uma equipe multidisciplinar envolvendo alunos das Faculdades de Direito e Medicina.

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre situações de conflitos e suas possibilidades de soluções, em especial metodologias dialógicas e de mediação, além do biodireito e da bioética em suas dimensões, inclusive a visão social e princípios constitucionais aplicáveis à temática, incluindo autores nacionais e estrangeiros.

Os integrantes do projeto acompanharam médicos e a equipe multiprofissional do setor em reuniões realizadas para discussão de casos, apresentação de elementos em conflito e definição de plano terapêutico aos pacientes da clínica.

A partir dos diálogos desenvolvidos em reuniões da equipe da Pediatria e da Ouvidoria e do Direito, foram analisados os casos relatados, buscando identificar eventuais situações de conflitos, como se desenvolvem e possíveis vias de tratamento, respeitado o sigilo. Também foram observadas

e estudadas as dificuldades de comunicação entre os setores, pessoas, membros e comunidade do ambiente hospitalar, sem exposição pessoal e/ou institucional para colaborar com uma abordagem mais dialógica, criativa e humanizada.

A atuação do projeto teve constante capacitação ampliada para a equipe envolvida de forma contínua, com a realização de grupo de estudo e apresentações semanais sobre temas que interessavam a melhor execução do projeto e o retorno de toda a produção acadêmica ao público-alvo do projeto.

Além da análise direta das demandas apresentadas no espaço de atuação do setor de Pediatria e da Ouvidoria da referida instituição de saúde, foram conduzidos debates periódicos com a equipe multidisciplinar do setor em temas que se mostraram pertinentes ao contexto, entre os quais a regulação e o alcance do termo de consentimento informado e a responsabilidade civil do profissional da saúde.

A relação entre a pesquisa bibliográfica com a análise sigilosa dos eventuais casos ocorridos e abordados pelo grupo de forma consensual ocorridos na Pediatria do Hospital das Clínicas serviu como base para proposta e incentivo ao desenvolvimento de práticas dialógicas promotoras de soluções compartilhadas no espaço hospitalar entre a equipe profissional e o usuário do serviço de saúde.

Em função da atuação desenvolvida pelo projeto e pelos contatos profissionais e institucionais estabelecidos, a equipe de extensão da universidade foi instada a colaborar para a melhor compreensão e solução do conflito surgido em razão de recomendação emitida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 2014, direcionada a instituições de saúde em Belo Horizonte para a necessidade de comunicação ao Poder Judiciário dos casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes. Na oportunidade, a equipe do projeto de extensão realizou várias reuniões com representantes das Defensorias Públicas da União e do Estado de Minas Gerais, do Hospital Risoleta Tolentino Neves e do Hospital das Clínicas da UFMG.

Foi produzido um documento multidisciplinar denominado “Protocolo para amparar a atuação dos hospitais públicos de Belo Horizonte”, entregue às Defensorias Públicas da União e do Estado de Minas Gerais, ao Hospital Risoleta Tolentino Neves e ao Hospital das Clínicas da UFMG. O material

apresentou fundamentos do Direito, da Medicina, da Psicologia e do Serviço Social e esclareceu sobre a possibilidade e a necessidade da adoção de medidas diversas daquelas recomendadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O protocolo elaborado visou orientar medidas adequadas a cada hipótese e ressaltar a existência de uma rede socioassistencial de instituições criadas para apoio e manutenção do vínculo familiar, estruturada de forma a assegurar a assistência integral de crianças e adolescentes, valorizando o vínculo familiar, em conformidade com os ditames da legislação brasileira, especialmente quanto à garantia dos direitos do recém-nascido e da mãe, inobstante usuária de drogas. O mencionado protocolo foi utilizado, inclusive, como referência para estudos, debates em vários fóruns e confecção de outros documentos, inclusive normativos, demonstrando o potencial de produção de conhecimento voltado às comunidades locais e com a sua efetiva participação e empoderamento.

Em todo o processo apresentado, o projeto de extensão promoveu o enriquecimento da formação e da capacitação dos estudantes da graduação e da pós-graduação envolvidos, entendendo-se que a educação terá uma atuação positiva quando proporcionar o desenvolvimento real dos estudantes e quando a sociedade for beneficiada pelos frutos do conhecimento produzido, gerando mudanças relevantes e contribuindo para que o corpo social se aperfeiçoe (Freire, 1996). Essa ação positiva ocorre na medida em que as instituições se voltam para o desenvolvimento social e institucional e para o cenário que compõem, no sentido de projetar as transformações necessárias e de se preocuparem com o grupo social de que fazem parte, em vez de permanecerem voltadas para si próprias.

A educação universitária brasileira, por expressa previsão constitucional, deve se pautar conjuntamente em ensino, pesquisa e extensão, consoante dispõe o caput do art. 207 da Constituição Federal Brasileira, segundo o qual "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (Brasil, 1988).

Freire (1996) esclarece que o processo de ensino deve ser dialógico e integrante, na medida em que discentes e docentes introduzem saberes que se complementam para a construção de um saber profundo e completo. Nessa perspectiva e pela mencionada diretriz constitucional, possibilita-se uma

transformação emancipadora dos estudantes, o que se reflete na sociedade como um todo pela inovação, a experiência, a descoberta e a intervenção social resultante.

O projeto permitiu, por meio das reuniões e debates efetivados no Setor de Pediatria com a equipe multiprofissional, levar ao setor a capacitação em temas jurídicos pertinentes às questões cotidianas e promover o conhecimento, empoderamento e a adoção de práticas dialógicas na condução dos conflitos, especialmente a mediação da questão entre os profissionais ou destes com os usuários do serviço.

Ademais, a atuação da extensão colaborou de forma direta e significativa do debate surgido junto às Defensorias Públicas e aos Hospitais públicos listados para a proteção dos direitos e garantias da criança e da mãe usuária de entorpecentes. Somado a isso, o projeto inspirou a produção científica consubstanciada em trabalhos de conclusão de curso na Faculdade de Direito, além de artigos e outros trabalhos apresentados em eventos científicos.

4. Pesquisa Universitária

Em decorrência da pesquisa e das experiências do projeto de extensão “Mediação e Saúde na Infância e Juventude”, foi desenvolvida pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais que originou dissertação voltada para a estruturação de um método adequado ao tratamento de conflitos verificados no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG).

Esse trabalho foi realizado por meio de pesquisa teórica, incluindo a investigação doutrinária, legislativa e comparada, e pela pesquisa de campo, desenvolvida pela realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais atuantes no HC-UFMG, possibilitando a obtenção de dados primários a serem incorporados no estudo.

Buscou-se identificar, em face das particularidades das relações hospitalares e dos conflitos delas advindos, um processo hábil ao estabelecimento de uma ordem jurídica justa na instituição, com efetivação dos direitos, notadamente o direito à saúde, e formação de uma cultura relacional e institucional de paz. Pretendeu-se, assim, estabelecer um pro-

cesso de mediação que promovesse uma ordem participativa e consensual que auxiliasse no empoderamento dos indivíduos e que abrisse ou ampliasse os espaços de diálogo e de elaboração de soluções compartilhadas para as questões vivenciadas.

Analisou-se a saúde enquanto direito fundamental assegurado constitucionalmente e os elementos que integraram sua formação e sua efetivação. Para observância da concepção de saúde adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, estruturou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por uma rede de serviços e de ações para promoção, proteção e recuperação da saúde. Após examinar a mediação enquanto meio de abordagem de conflitos, foram expostas iniciativas brasileiras de utilização do referido processo para a resolução de conflitos.

Realizaram-se entrevistas semiestruturadas, com o consentimento dos entrevistados e manutenção do sigilo sobre sua identidade. O público entrevistado foi organizado segundo a atividade exercida no HC-UFMG, compondo três grupos: porteiros e recepcionistas, médicos e profissionais da saúde, esse último integrado pelos profissionais não médicos que participam dos serviços relacionados à assistência à saúde na Instituição.

Por meio da coleta de dados realizada junto ao HC-UFMG mediante entrevistas, foi possível identificar dificuldades e conflitos recorrentes vivenciados na Instituição, bem como meios já existentes para o tratamento de eventuais controvérsias. Segundo as informações obtidas, pode-se concluir pela viabilidade e proficiência da adoção da mediação como método complementar àqueles já utilizados no Hospital, no sentido de disponibilizar instrumento adequado à realidade das relações nele verificadas, que sobressai ao conflito e se estabelece na necessidade humana de constituir e conservar comunicação e ligações.

Analisando-se o HC-UFMG e sua realidade, verificou-se ser possível o estabelecimento da mediação por meio de sua Ouvidoria, ressaltando-se sua estruturação de forma a preservar as condições fundamentais do processo e do mediador, bem como mediante iniciativas oriundas da Universidade com projetos ou ações de extensão para a prática da mediação no Hospital.

Mostrou-se adequado, também, o uso da mediação na Instituição por meio de associações e casas de apoio atuantes junto aos usuários do HC-UFMG e ao próprio Hospital. Concluiu-se, ademais, ser possível sustentar a adoção do

processo de mediação pelos setores ou pelas equipes de saúde do HC-UFGM, organizada pelos próprios profissionais que a integram, para a abordagem das relações e dos conflitos concernentes ao seu âmbito de atuação e às pessoas nele inseridas.

Os resultados obtidos com a pesquisa mencionada foram apresentados ao HC-UFGM com o intuito de inspirar novas práticas dialógicas, eventual inserção e adoção da mediação e o acesso à justiça pela via dos direitos por profissionais e usuários do serviço de saúde.

5. Discussão e Análise

As práticas de extensão e de pesquisa descritas permitiram a realização de ações para constatação da realidade social e institucional envolvida nos serviços de saúde alvos das práticas, considerando-se de forma específica as relações verificadas e as formas de abordagem de conflitos, permitindo a constatação da possibilidade de inserção da mediação ou de práticas dialógicas a ela relacionadas no âmbito hospitalar, que se mostrou possível e profícua.

Todos os relacionamentos humanos experimentam conflitos na interação social. As relações interpessoais nos diversos âmbitos – familiares, profissionais, comunitários, institucionais ou organizacionais – vivenciam desavenças, tratando-se de ocorrência natural ao convívio e ao estar em relação.

Em grupos ou ambientes nos quais há grande fragmentação, o conflito pode ter função integradora de relações, uma vez que permite a expressão e identificação de problemas, insatisfações e tensões e enseja oportunidade para que estruturas e laços sejam reajustados e harmonizados, resultando em coesão entre os envolvidos e estabelecimento de identidade coletiva e individual (Deutsch, 2004). Desavenças também se revelam frequentemente como mecanismo para ocasionar a criação e alteração de normas, em especial pela necessária adequação dessas à conjuntura sob regulação, bem como para organizar e acomodar estruturas, recursos e poderes.

O que se verifica, pois, é que o conflito pode conduzir a situações e resultados positivos e produtivos, ou degradantes e nocivos. Nesse âmbito, o procedimento adotado pelos envolvidos para lidar com ele é elemento central para a definição de seu seguimento e repercussão, bem como da continuidade e qualidade da relação pessoal e/ou jurídica decorrente.

Os procedimentos de tratamento de conflitos diferem consideravelmente no direcionamento e na definição da desavença e, com frequência, apresentam diferentes resultados (Moore, 1998). Os métodos adotados podem apresentar maior ou menor formalidade, envolvimento de terceiros e até a transferência a estes do poder de condução e de deliberação sobre o conflito, como se vislumbra na classificação dos procedimentos elaborada por Soler (2014). Por sua vez, o tratamento cooperativo das desavenças depende da capacidade e da disposição dos envolvidos em adotar os procedimentos pautados em colaboração, os quais também podem contar com a participação de terceiros.

A principal forma de tratamento de conflitos tradicionalmente estabelecida e adotada no Brasil é a jurisdição, exercida pelos órgãos e membros do Poder Judiciário, que tem função fundamental na efetivação do Estado Democrático de Direito. Constitui ente essencial na guarda e observância da Constituição (CR/1988) e na preservação dos valores e princípios que a fundamentam, previstos em seu art. 1º, quais sejam: cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político (Brasil, 1988).

Acerca da realização do Direito, da efetivação da justiça e da garantia de seu acesso a todos, algumas considerações merecem atenção. Adota-se neste trabalho a concepção de que a justiça não se limita a conceitos jurídicos ou a uma visão formalista, mas é construída pelos interessados em adequação à realidade do grupo social ao qual se refere (Silva, 2017).

A partir dos vários debates, releituras e estudos já realizados acerca do “acesso à justiça”, este não pode mais ser considerado nos acanhados limites do acesso aos órgãos constituintes do sistema de justiça, porquanto seria reduzi-lo, de forma inadequada, a uma parcela da totalidade que o compõe.

É certo que o acesso à justiça é integrado pelo direito ao ajuizamento de ação judicial, ao processo justo e produtor de resultados satisfatórios. Com efeito, os órgãos judiciais e o processo neles instaurados são necessários ao tratamento formal e oficial de questões de direito para assegurar seu cumprimento, bem como eventual reparação e responsabilização quando de sua violação. Contudo, a acessibilidade da justiça não se esgota nisso e nem em uma única dimensão.

Acerca do acesso à justiça no Brasil, Watanabe (1988) assevera não se tratar apenas de possibilitar o acesso à instituição estatal, mas de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Nessa conjuntura, o autor destaca a relevância de se organizar e estruturar a Justiça em consideração às características sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade para a qual ela está voltada, de modo a se alcançar o correto tratamento de conflitos e a realização efetiva de direitos.

Sob essa concepção, o sistema de resolução dos conflitos por meio da adjudicação da solução pela autoridade estatal é adequado a alguns conflitos, mas impróprio a outros. Dessa forma, o direito de acesso à ordem jurídica justa envolve a acessibilidade por todos a instrumentos processuais aptos à efetiva realização do direito e a uma Justiça adequadamente organizada para corresponder, em quantidade e qualidade, às exigências apresentadas pela multiplicidade de conflitos de configurações variadas (Watanabe, 1988).

Esse autor afirma que uma das causas da intensa conflituosidade e excessiva sobrecarga de processos enfrentados pelo Poder Judiciário nacional, com conseqüente crise de seu desempenho, é a “[...] falta de uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na sociedade”, contexto em que propõe uma nova compreensão do tema como garantia de acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva, tempestiva e adequada, o que implica “[...] organizar os serviços de tratamento de conflitos por todos os meios adequados, e não apenas por meio da adjudicação de solução estatal em processos contenciosos” (Watanabe, 2011, pp. 384-385).

O acesso à justiça trata, pois, de assegurar a efetividade da justiça e de direitos no âmbito do Poder Judiciário e além dele, com acesso a diferentes mecanismos, procedimentos e espaços, o que importa, também, na participação direta dos indivíduos na constituição de seus direitos e na administração de seus conflitos, que não mais serão única e imediatamente deslocados à gestão e resolução por terceiros.

É preciso, então, problematizar caminhos mais acessíveis para que os indivíduos alcancem a justiça e os direitos, vias que sejam desburocratizadas, menos formais e mais conexas aos grupos sociais, que sejam aptas a realizar o acesso à justiça pela via dos direitos. Sob essa perspectiva, o acesso à justiça implica uma condição para o pleno exercício da cidadania e para a realização da democracia (Avritzer et al., 2014), elementos necessários para

o cumprimento do Estado Democrático de Direito no Brasil, o que reforça a importância dessa concepção de acesso à justiça e a imprescindibilidade de sua promoção no cenário social.

A justiça será atingida quando indivíduos, grupos e coletivos lesados tiverem a consciência, a oportunidade de conhecer e de se informar, de forma satisfatória, acerca de seus direitos. Não se trata, portanto, de mera criação de espaços de solução de conflitos, judiciais ou extrajudiciais. Mas sim, de políticas públicas no âmbito da informação, educação e divulgação de conhecimentos jurídicos com vista a capacitar os cidadãos e as comunidades para, por si mesmos, perante uma situação de desrespeito, violação, exclusão, ofensa ou privação de direitos, a reconheçam como tal (Avritzer et al., 2014, p. 20).

O acesso à justiça assim considerado abrange, ainda, a ação coordenada de diversos atores sociais, incluindo o Estado, que garanta aos indivíduos competência e conhecimento que os habilite a decidir sobre o modo mais adequado para gerir, prevenir e resolver seus conflitos e, dessa forma, definir o acesso à justiça que lhes pareça mais apropriado e legítimo, quadro em que a mediação e o próprio processo judicial seriam possibilidades (Nicácio, 2011, p. 40).

Nesse cenário, houve no Brasil, desde meados da década de 1990, a implementação de projetos, organizados pelo Estado, por universidades e pela sociedade civil, voltados ao acesso à justiça com a utilização de métodos ditos “alternativos de resolução de conflitos” (Brasil, 2005). Sob a conjuntura descrita, os tribunais e a legislação brasileiros se voltaram para consolidar outras vias de composição de conflitos além do processo judicial, como a arbitragem, a conciliação e a mediação (Silva, 2017).

A mediação ganhou forte incentivo institucional e normativo com a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Brasil, 2010), que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, com vistas a assegurar o direito à solução de conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade no âmbito do Poder Judiciário. Os fundamentos expostos na mencionada Resolução incluem a consideração de ser atribuição do Poder Judiciário o estabelecimento de política pública voltada ao “tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses”, organizando “[...] os serviços prestados nos processos judiciais,

como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos”, em que se destacam os meios consensuais da mediação e da conciliação (Brasil, 2010).

A efetivação de direitos e o acesso à justiça pela via dos direitos no meio hospitalar, como nos demais setores e instituições, também exigem a adequação de procedimentos. São necessários, no âmbito da saúde, estruturas e instrumentos não judiciais de acessibilidade à justiça próximos aos usuários, simplificados quanto à burocracia e ao formalismo e adequados aos pleitos por direitos e por tratamentos de conflitos vivenciados. Especialmente considerando as limitações muitas vezes físicas que importa, inclusive em contextos de internação, a instituição hospitalar demanda a criação de espaços de acesso à justiça alcançáveis pelos sujeitos envolvidos e por eles reconhecidos como meios legítimos e confiáveis.

As ações de extensão e de pesquisa voltaram-se ao fato de que a efetivação de direitos e o acesso à justiça pela via dos direitos no meio hospitalar também exigem a adequação de procedimentos. São necessários, no âmbito da saúde, estruturas e instrumentos não judiciais de acesso à justiça que sejam próximos aos usuários e adequados aos pleitos por direitos e por tratamentos de conflitos vivenciados.

Em razão da importância apresentada da qualidade da relação médico-paciente para o processo diagnóstico e terapêutico e para a concretização do direito à saúde em sentido amplo, bem como da relevância do trato adequado de conflitos para a continuidade e melhoria dessa relação única e necessária, foi avaliada a adequação da mediação para o tratamento de eventuais desavenças e dissensões.

Six (2001) afirma a possibilidade e o potencial transformador da inserção da mediação no ambiente hospitalar como método de melhoria e estabelecimento de conexões e de abordagem adequada e dialógica de conflitos. Em consonância com essa concepção, destacam-se os ensinamentos de Warat (2001) acerca da aptidão da mediação em transformar o conflito e as pessoas em conflito.

A mediação, em razão dos elementos que a compõem, de seus objetivos e das possibilidades por ela ensejadas, mostrou-se adequada ao contexto analisado, especialmente considerando a relação médico-paciente, as pessoas integrantes do processo diagnóstico e terapêutico, as diretrizes

do hospital e do sistema de saúde que ele integra. Trata-se de método que possibilita a criação e a renovação de vínculos interpessoais e intergrupais, além de propiciar condições para prevenção de conflitos e tratamento daqueles já constituídos.

A mediação conforme apresentada por Six (2001) estaria amparada na compreensão cultural, influenciada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, de que as semelhanças são mais importantes que as diferenças. Nessa perspectiva, a mediação constitui trabalho de regulação das relações interpessoais e intergrupais, voltado ao constante estabelecimento de novas ligações entre os sujeitos, de reparação de laços danificados ou distendidos e de gestão de vínculos rompidos.

Diante dos efeitos transformadores e restauradores potencialmente gerados pela mediação sob essa concepção, valorosos para sujeitos em conflito e para a sociedade, a mediação representa um novo modelo de regulação social, uma nova forma de ação que implica em recomposição de relações (Bonafe-Schmitt, 2012, p. 200-201). Portanto, a mediação revela-se utilizada como instrumento de gestão de conflitos, permitindo favorecer o tratamento das desavenças, mas também e especialmente como um instrumento para impulsionar uma dinâmica social, promovendo e melhorando as relações interpessoais e intergrupais (Bonafe-Schmitt, 2012).

Tendo em vista os aspectos abordados, a mediação no âmbito da saúde pode se dar além da mera resolução de conflitos, constituindo-se modelo de regulação social, enquanto processo que objetiva a transformação relacional na Instituição e, por consequência, importa na recomposição de relações, na promoção de uma cultura colaborativa, no empoderamento dos envolvidos e na geração de novas perspectivas dos indivíduos sobre si e sobre o outro. A mediação será considerada especialmente como meio de administração de conflitos, “[...] permitindo o encontro com o outro, não apenas para barganhar interesses, mas para ouvir, ser ouvido, tomar decisões e transformar a si mesmo e ao conflito vivenciado” (Silva, 2013, p. 28). A mediação também permite trabalhar as palavras de modo a ensinar uma comunicação real e não um simples cruzamento de declarações ou até mesmo o uso dos mesmos termos em significados frequentemente incompatíveis e geradores de incompreensão (Guillaume-Hofnung, 2018). Como assinala Guillaume-Hofnung (2018, p. 110),

“pode haver mediação sem conflito, por necessidade de diálogo, por humanidade”.

Pode-se, pois, compreender, nesse contexto, a mediação como processo complementar de administração de conflitos e de regulação social pelo qual pessoas buscam voluntariamente, por meio do diálogo e da participação ativa, a melhoria da qualidade de sua relação ou o tratamento mutuamente aceitável de uma situação conflituosa, criando ou fortalecendo laços relacionais deteriorados ou enfraquecidos pelo conflito, tudo isso auxiliados por uma terceira pessoa independente, equidistante e não autoritária, denominado mediador, que facilita a comunicação entre os sujeitos. Trata-se, pois, de instrumento de lógica participativa e dialógica com potencial de transformação não somente da eventual situação conflituosa estabelecida, mas também dos atores envolvidos, da maneira de tratar os conflitos, dos direitos que os revestem e do processo de sua efetivação.

Considerando que a mediação propicia o empoderamento das pessoas, o acolhimento e a escuta qualificada, volta-se à melhoria da qualidade do serviço público de saúde prestado, porquanto, quanto melhor for o vínculo estabelecido com o usuário, menores serão os embaraços à sua participação e sua adesão nas relações pessoais e no processo de cuidado, o mesmo podendo-se afirmar em relação ao profissional da saúde atuante no serviço.

A mediação que promova diálogo e participação entre os mediandos, em uma gestão de desavenças hábil a criar ou recriar vínculos rompidos ou debilitados pelo conflito e a aumentar a qualidade relacional dos conflitantes, tem potencial para alterar a prestação dos serviços de saúde e a própria cultura institucional hospitalar em face dos conflitos. Trata-se não somente de um meio de abordagem de conflitos, mas essencialmente de um modo de construção e de gestão dos vínculos entre pessoas e grupos no âmbito hospitalar graças à atuação de um terceiro qualificado, independente, equidistante, sem outro poder que a autoridade que lhe reconhecem as pessoas que se dirigem à mediação.

Guillaume-Hofnung (1999) esclarece que, além de abarcar os valores da mediação voltada à gestão do conflito concernentes em pacificação, autonomia dos mediandos e administração de conflitos, a mediação de vínculo social concretiza outros valores, como a solidariedade, a dignidade humana, a comunicação ética, a consideração do valor do outro, a recusa à instru-

mentalização da pessoa como receptor passivo da comunicação de um sujeito dominante. Para essa autora, os valores da mediação voltada ao vínculo social permitem estimar o papel que a mediação tem e que poderia ter no hospital (Guillaume-Hofnung, 1999, p. 41).

Entendendo-se, assim, a metodologia da mediação aplicada no âmbito da saúde para promoção do acesso à justiça como ordem jurídica justa, na forma já apresentada, e como via para a efetivação do direito à saúde, impositivo compreender em que consiste esse direito.

Na primeira metade do século XX, houve intenso movimento pelo resgate da dignidade humana, da paz entre os povos e as nações e da cooperação entre os Estados, historicamente marcado pela criação da ONU em 1945 e pelo seu envolvimento nos esforços empreendidos.

O movimento e as discussões surgidos fomentaram a publicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, documento relevante e fundamental para o fortalecimento da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos como paradigma das relações entre os povos (Organização das Nações Unidas, 1948).

Nesse contexto histórico, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi fundada quando instituída sua Constituição, adotada pela Conferência Internacional de Saúde sediada em Nova Iorque em junho e julho de 1946 e cuja entrada em vigor se deu em 7 de abril de 1948 (Organização Mundial Da Saúde, 1946).

A mencionada movimentação internacional e os diplomas normativos e declaratórios instituídos em nível mundial deram ensejo ao reconhecimento do direito à saúde segundo os princípios e as concepções advindos do arcabouço de direitos e garantias estabelecidos. Dessa forma, o conceito de saúde deixou de ser mera equiparação à ausência de doença ou de enfermidade e foi ampliado para o completo bem-estar físico, psíquico e social, conforme estabelecido no primeiro princípio da Constituição da OMS (Organização Mundial da Saúde, 1946). Com isso, o ser humano foi considerado como um conjunto complexo de características e necessidades, todas igualmente relevantes.

Não se pode ignorar que o citado conceito de saúde foi objeto de construção, discussão e amadurecimento ao longo de décadas. Nada obstante, a

partir dos marcos principiológicos citados, os esforços dos Estados membros das organizações pela efetivação do direito à saúde guardaram estreita semelhança com o conceito de saúde preconizado pelas entidades internacionais citadas, especialmente pela OMS.

O reconhecimento de direitos e suas novas configurações interferem nas atividades dos diversos Estados e instituições, tendo em vista que a consideração sobre o ser humano assume relevância singular nas legislações nacionais, que passam a contemplar a saúde como um direito de todos a ser assegurado pelo Estado (Andrade, 2007). Com efeito, o aprimoramento do conceito de saúde na comunidade internacional suscitou uma busca pela adequação dos ordenamentos jurídicos nacionais a esse novo paradigma, relacionando saúde ao bem-estar físico, psíquico e social e valorizando-a como componente central do desenvolvimento humano.

O Brasil é membro da ONU e da OMS e adotou os princípios e parâmetros por elas estabelecidos. Portanto, observa-se que a consideração ampliada da saúde para além da ausência da doença passa a encontrar amparo também em nível nacional, inclusive no ordenamento jurídico.

A CR/1988 estabeleceu a saúde como direito social em seu art. 6º (Brasil, 1988). Nesse contexto, a saúde, então assegurada constitucionalmente, foi reconhecida como essencial à qualidade de vida e à garantia da dignidade da pessoa humana, imprimindo-lhe a condição de direito fundamental.

Diante do mencionado reconhecimento, a CR/1988 prescreve, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988).

A legislação infraconstitucional acompanhou as novas considerações e referenciais acerca da saúde, conforme se verifica na Lei Federal nº 8.080/1990 (Brasil, 1990), segundo a qual a saúde é um direito fundamental do ser humano (art. 2º) e tem “[...] como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” (art. 3º), relacionando-se, também, com as ações que “[...] se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social” (p. u., art. 3º).

Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico nacional adotou os referenciais estabelecidos internacionalmente, destacando-se aqueles firmados pela OMS. Por conseguinte, a saúde atingiu nova amplitude, alcançando ações e políticas públicas antes inexistentes.

Todos os elementos expostos colaboraram para a extensão do direito à saúde e do acesso aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde a todos os habitantes do território nacional, além da caracterização desses serviços como públicos, essenciais e universais.

Com a ampliação da concepção acerca do direito à saúde e as mobilizações sociais, políticas e institucionais pela reforma dos serviços de saúde, o sistema público foi modificado, adquirindo nova estrutura, composição e acessibilidade e passando à denominação de Sistema Único de Saúde (SUS). Garantindo o acesso universal de todos os cidadãos aos serviços de saúde, o novo sistema voltou-se à efetivação do direito à saúde enquanto direito fundamental em seu aspecto ampliado ao bem-estar físico, psíquico e social.

O SUS foi criado pela CR/1988 e regulamentado pela Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como para a organização e o funcionamento das ações e dos serviços correspondentes, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado (Brasil, 1990).

Pelas razões expostas e considerando as particularidades da área da saúde e, notadamente do direito à saúde, integrados por um complexo sistema de serviços, de instituições, de sujeitos e de políticas públicas, a transformação necessária ao acesso à justiça pela via dos direitos alcança a saúde e seus elementos.

Pesquisas, análises e práticas realizadas por meio de ação de extensão e de trabalho de dissertação evidenciaram que a mediação considerada enquanto processo para criar, melhorar e restaurar vínculos entre pessoas ou grupos e para prevenção, gestão e resolução de conflitos é propícia ao âmbito hospitalar para humanização da prestação do serviço de saúde, efetivação do direito fundamental à saúde e plena execução de uma política pública de saúde de qualidade, com observância dos princípios e das diretrizes que a orientam.

A qualificação do diálogo e da relação pela mediação tanto entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento quanto desses com o paciente e sua família possibilita o empoderamento dos envolvidos, a promoção da consciência da realidade, do reconhecimento do outro, da atuação cooperativa, da tomada de decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS.

6. Conclusão

A estrutura universitária, apoiando-se no ensino, na pesquisa e na extensão, de modo conjunto, proporciona ao aluno a experiência da autonomia e do crescimento, confere à instituição maior alcance catalisador de transformações, influência social e produção acadêmica e propicia à sociedade a redução de injustiças e o melhoramento estrutural e organizacional.

A pesquisa e a extensão, esta necessariamente associada à pesquisa, permitem a geração de novos conhecimentos, constatação de realidades sociais e institucionais e a investigação de possíveis soluções ou meios para aperfeiçoamento, resultados que, se efetivados, conferem efetiva função social ao conhecimento produzido.

Compreendendo-se a relevância do ensino superior não apenas para a formação profissional, mas também para investigação, geração e disseminação de conhecimentos promotores de transformação social, econômica e estrutural, ressaí a importância de sua atuação na consecução dos ODS.

Sobre as atividades de pesquisa e de extensão universitária, experiências desenvolvidas pela UFMG agregando distintas áreas do conhecimento mostram evidências da possibilidade de integrar os ODS nesses âmbitos de atuação universitária.

A experiência realizada na UFMG revelou o potencial de consecução do ODS 16, uma vez que as práticas de mediação adotadas nos serviços de saúde e as estruturas de inserção do método na instituição hospitalar propiciaram a inclusão dos profissionais e usuários da saúde nas decisões e conduções de eventuais conflitos e a facilitação do acesso à justiça pela via dos direitos.

As ações universitárias narradas mostraram-se colaboradoras da garantia de igualdade e de efetividade de acesso à justiça para todos no âmbito da

saúde, bem como favorecedoras do desenvolvimento de instituições hospitalares eficazes e responsáveis e da tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis, aspectos estes que compõe as metas 16.3, 16.6 e 16.7 desse ODS.

Tratando-se os ODS de objetivos integrados e indivisíveis, vislumbra-se pela consecução do ODS 16 na forma descrita a promoção referida no ODS 3, no sentido de garantir o acesso aos serviços de saúde humanizados, inclusive alcançando os profissionais da saúde com essa melhoria.

As IES têm, portanto, um papel crucial na consecução dos ODS, especialmente pelo seu trabalho de geração e disseminação de conhecimentos e sua situação promissora na sociedade.

Referencias:

- Andrade, DA. (2007). A mediação de conflitos em meio hospitalar e o direito à saúde. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, Universidade de Fortaleza, Fortaleza.
- Avritzer, L; Marona, M; Gomes, L. (2014). Cartografia da justiça no Brasil. São Paulo: Saraiva.
- Bonafe-Schmitt, J-P. (2012). Os modelos de mediação: modelos latinos e anglo-saxões de mediação. Meritum – Revista de Direito da Universidade FUMEC, v. 7, n. 2, jul-dez 2012, p. 181-227.
- Brasil. (2010). Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília: Conselho Nacional de Justiça. Recuperado de: http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016162839.pdf
- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado.
- Brasil. (1990). Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União.

- Brasil. (2005). Mapeamento nacional de programas públicos e não-governamentais. Sistemas Alternativos de Solução e Administração de Conflito, Ministério da Justiça. Recuperado de http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_acesso_justica.pdf
- Conselho Nacional de Justiça. (2015). Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. Brasília: Conselho Nacional de Justiça. Recuperado de <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/6781486daef02bc6ec8c1e491a565006.pdf>
- Organização das Nações Unidas. (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recuperado de www.direitoshumanos.usp.br
- Deutsch, M. (2004). A Resolução do Conflito. Em AG AZEVEDO (coorden.), Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação – Vol. 3 (cap. 5). Brasília: Grupos de Pesquisa. Recuperado de www.arcos.org.br
- Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
- Guillaume-Hofnung, M. (2018). A mediação. Belo Horizonte: RTM.
- Guillaume-Hofnung, M. (1999). Hôpital e Médiation. Paris: L'Harmattan.
- Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior em América Latina y el Caribe. (2020). La Contribución de la Educación Superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Marco Analítico. Caracas: IESALC. Recuperado de <http://www.iesalc.unesco.org/2020/02/17/2595/>
- Moore, CW. (1998). O Processo de mediação. Estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed.
- Nações Unidas. (2015). Agenda 2030. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/pos2015/>
- Nicácio, CS. (2011). Direito e Mediação de Conflitos: entre metamorfose da regulação social e administração plural da justiça. Revista da Faculdade de Direito UFMG. Belo Horizonte, n. 59, p. 11-56.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). (1946). Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO). Recuperado de <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1>
- Silva, NF. (2013). Da mediação voltada à cidadania às essencialidades da atuação do mediador: a independência, a equidistância e o não-poder. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

- Silva, NF. (2017). O diálogo dos excluídos: a mediação social informativa como instrumento de ampliação do acesso à justiça pela via dos direitos no Brasil. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Soler, RC. (2014). Mapeo de conflictos: técnica para la exploración de los conflictos. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Six, J-F. (2001). Dinâmica da Mediação. Belo Horizonte: Del Rey.
- Warat, LA. (2001). O Ofício do Mediador. Florianópolis: Habitus.
- Watanabe, K. (2011). Política pública do Poder Judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. Revista de Processo. N. 195, mai.

Bionotas:

Cibele Aimée de Souza. Doutoranda e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Assessora Judiciária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Brasil

Correo electrónico: cibealaimee@yahoo.com.br

Adriana Goulart de Sena Orsini. Pós-doutora em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Professora Associada III Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Membro do Corpo Permanente Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordenadora Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Solução de Conflitos e Acesso à Justiça da UFMG. Brasil

Correo electrónico: adrisena@uol.com.br